



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



JUZGADO PROMISCO MUUNICIPAL

Galán, Santander, veinticuatro (24) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Clase de Proceso: Verbal Sumario - Negatorio de servidumbre

Radicado: 2023-00024-00

Demandante: Hender Rodolfo Durán Salazar

Demandados: Jesús María Bernal Herrera - Martha Cecilia García Caballero

1. CUESTIÓN PREVIA

Reza el numeral 2.º del inciso 3.º del dispositivo 278 del Código General del Proceso:

«En cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial, en los siguientes eventos:

(...) 2. Cuando no hubiere pruebas por practicar.»

Así las cosas, haciendo uso de la licencia concedida al Juez en la preceptiva transcrita, se pasará a dictar sentencia adelantada dado que con la probanza documental que nutre el expediente se obtiene certeza para resolver el diferendo; resultando insustancial llevar a cabo la audiencia contemplada en el artículo 392 del Reglamento Procesal Civil, máxime cuando ninguna prueba hay que practicar en la susodicha diligencia, destacando sea de paso, que los interrogatorios a las partes que de imperativo deben realizarse en la vista pública en comento, no se estiman necesarios para alcanzar el convencimiento de este fallador, comoquiera que, tal cual quedó plasmado en el proveído que decretó las pruebas del proceso¹, con la documentación aportada por los litigantes es más que suficiente para establecer si se configuran los motivos invocados para fundar la negación de servidumbre.

Ahora, en STC de 27 de abril de 2020, radicado 47001 22 13 000 2020 00006 01, se autoriza al juzgador, para que, por auto previo o al interior del fallo, se pronuncie sobre la suficiencia del material probatorio para finiquitar la disputa prematuramente; textualmente se ilustró:

¹ Auto del nueve (9) de octubre de dos mil veintitrés (2023), obrante al archivo 041 del cuaderno 1 del expediente virtual.



«En suma, cuando el juez estima que debe dictar sentencia anticipada dado que no hay pruebas para practicar, debe decidirlo mediante auto anterior, si así lo estima, o en el texto del mismo fallo con expresión clara de los fundamentos en que se apoya.».

Acerca de la importancia de la sentencia anticipada, en SC1902-2019 se aseveró:

«De lo anterior, se desprende que los jueces tienen la obligación de, una vez advertido el no cumplimiento del debate probatorio o que de llevar este último a cabo resultaría inocuo, proferir el fallo sin adicionales trámites, en cabal cumplimiento de lo expuesto por los principios celeridad y economía procesal, que, en últimas, reclaman de la jurisdicción decisiones prontas, «con el menor número de actuaciones posibles y sin dilaciones injustificadas». De no ser así, sería someter cada causa a una prolongación absurda, completamente injustificada, en contra de los fundamentos sustanciales y procesales que acompañan los trámites judiciales.».

A la par, de cara a la posibilidad de terminar con antelación el rito acudiendo a una resolución escrita cuando la claridad causal sea ostensible; en SC2420-2019 se aleccionó:

*«1. La regla 278 del Código General del Proceso prescribió que, «[e]n cualquier estado del proceso, el juez **deberá** dictar sentencia anticipada, total o parcial... [c]uando no hubiere pruebas por practicar» (se destaca).*

Dicha norma ordena pretermitir etapas instituidas en las normas adjetivas, para dar paso a la fase decisoria, siempre que la instructiva resulte inocua, (...)

La omisión de fases faltantes, en busca de la sentencia anticipada, necesariamente supone que debe estar trabada la litis, en el sentido técnico de la teoría procesal, es decir, que las diligencias de notificación de la admisión del libelo (o del mandamiento de pago, en otros casos) a la parte afectada estén superadas, así como evacuado el trámite de las excepciones para garantizar el derecho de defensa y contradicción recíproca a las partes, en orden a que se observe el principio de bilateralidad de la audiencia, propio del debido proceso.

Luego, solo cuando los juzgadores adviertan que no habrá debate probatorio o que es vano, itérese, agotada la fase introductoria del litigio, pueden proferir sentencia definitiva sin más trámites, los cuales, por cierto, se



tornan innecesarios, al existir claridad fáctica sobre los supuestos aplicables para desatar la controversia.

Esta filosofía inspiró las recientes transformaciones de las codificaciones procesales, en las que se prevé que las causas pueden fallarse a través de resoluciones anticipadas, cuando se haga innecesario avanzar hacia etapas posteriores(...).

*En este escenario, el respeto a las formas propias de cada juicio se armoniza con los principios de celeridad y economía procesal, los cuales reclaman decisiones prontas, adelantadas con el menor número de actuaciones posibles y sin dilaciones injustificadas. **Reliévese que las formalidades están al servicio del derecho sustancial, por lo que cuando se advierta la futilidad de aquellas deberán soslayarse, como cuando en la foliatura se tiene todo el caudal suasorio requerido para tomar una decisión inmediata,** o cuando los hechos controvertidos están exentos de acreditación.*

Lo contrario equivaldría a una «irrazonable prolongación [del proceso, que hace] inoperante la tutela de los derechos e intereses comprometidos en él»(...). Insístase, la administración de justicia «debe ser pronta, cumplida y eficaz en la solución de fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento» (artículo 4 de la ley 270 de 1996), para lo cual se exige que sea «eficiente» y que «[l]os funcionarios y empleados judiciales [sean] diligentes en la sustanciación de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban proferir conforme a la competencia que les fije la ley» (artículo 7 ibidem).

En suma, el proferimiento de una sentencia anticipada supone que algunas etapas del juicio no se agoten, con el fin de dar prevalencia a la celeridad y economía procesal, lo que es armónico con una justicia eficiente, diligente y comprometida con el derecho sustancial.»². (Subrayas y negrillas intencionales).

2. A S U N T O

Interesa proferir la sentencia que en derecho corresponda dentro del proceso *Verbal Sumario de Negación de Servidumbre* adelantado por **HENDER RODOLFO DURÁN SALAZAR** en contra de **JESÚS MARÍA BERNAL HERRERA** y **MARTHA CECILIA GARCÍA CABALLERO**.

² En el mismo sentido consultar las sentencias SC974-2018, SC878-2018, SC3473-2018 y SC132-2018.



3. ANTECEDENTES

3.1. LA DEMANDA

HENDER RODOLFO DURÁN SALAZAR, representado por abogada, presentó demanda *Verbal Sumaria* contra **JESÚS MARÍA BERNAL HERRERA** y **MARTHA CECILIA GARCÍA CABALLERO** con la que pretende se declare que en los inmuebles denominados «**LA VEGA**», «**EL RINCÓN**», «**SAN BASILIO**» y «**MIREYA**» identificados respectivamente con los folios de matrícula inmobiliaria número **302-7738**, **302-5264**, **302-5268** y **302-4606** de la **OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS** de **BARICHARA, SANTANDER**, no existe una servidumbre activa de tránsito en favor de la heredad llamada «**EL NARANJITO**» individualizada con el folio de matrícula inmobiliaria número **302-2694** de la **OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS** de **BARICHARA, SANTANDER**.

Comenta que a los predios «**LA VEGA**», «**EL RINCÓN**», «**SAN BASILIO**» y «**MIREYA**», de su propiedad, los atraviesa una carretera privada construida con recursos propios para desarrollar un proyecto productivo de cultivo de cítricos; sin embargo, **JESÚS MARÍA BERNAL HERRERA** «(...) empezó a hacer uso deliberado de dicha carretera (...) sin permiso pese a que sobre [sus] predios (...) no recae ningún tipo de servidumbre a favor del predio de los demandados.».

Agrega, que no es imprescindible que **JESÚS MARÍA BERNAL HERRERA** utilice el camino que pasa por los predios «**LA VEGA**», «**EL RINCÓN**», «**SAN BASILIO**» y «**MIREYA**» para llegar al suyo, ya que el predio «**EL NARANJITO**» cuenta con acceso por los costados norte y sur.

Remata asegurando que «(...) la acción deliberada de la parte demandada de atravesar por [sus] predios (...) sin que exista una servidumbre establecida (...) le está imponiendo una carga (...) que no está en la obligación de soportar.».

3.2. POSTURA DE LA PARTE PASIVA

Los demandados, por medio de profesional del derecho, se opusieron a los pedimentos del actor manifestando (i) que la dueña exclusiva del predio «**EL NARANJITO**» es **MARTHA CECILIA GARCÍA CABALLERO**; (ii) que con ocasión de la sociedad comercial formada entre **JESÚS MARÍA BERNAL HERRERA** y **HENDER RODOLFO DURÁN SALAZAR** tendiente a la explotación del cultivo de cítricos,



Juzgado Promiscuo Municipal
Galán, Santander

fue habilitada la vía que cruza los predios «**LA VEGA**», «**EL RINCÓN**», «**SAN BASILIO**» y «**MIREYA**»; (iii) que dicha empresa fue liquidada, por lo tanto **HENDER RODOLFO DURÁN SALAZAR** no les permite el paso por la carretera objeto de esta controversia; (iv) que el predio «**EL NARANJITO**» «(...) colinda con el camino real denominado “El Camino Real Lenguerke” y ese camino es patrimonio cultural y no se puede arreglar para vía vehicular ya que es patrimonio cultural de Colombia»; y (v) que **MARIA EDELMIRA PORRAS SANTAMARÍA** y **EXPEDITO GÓMEZ DURÁN** utilizan el camino que traspasa los predios «**LA VEGA**», «**EL RINCÓN**», «**SAN BASILIO**» y «**MIREYA**» sin inconveniente alguno.

4. PROBLEMA JURÍDICO

La problemática se restringe a responder el siguiente interrogante:

- (i) ¿La petición de **HENDER RODOLFO DURÁN SALAZAR** reúne los requisitos para declarar que en los predios «**LA VEGA**», «**EL RINCÓN**», «**SAN BASILIO**» y «**MIREYA**» no existe una servidumbre de tránsito que sirva al predio «**EL NARANJITO**»?

5. TESIS DEL JUZGADO

Positiva respecto de los predios «**LA VEGA**» y «**SAN BASILIO**»; negativa en lo que concierne a los predios «**EL RINCÓN**» y «**MIREYA**».

6. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Están legitimados para impulsar el proceso de servidumbre en sus diferentes variables, el propietario del inmueble sirviente y el del dominante; también, por vía de doctrina, se concede esta prerrogativa al poseedor, en efecto, el profesor **HERNÁN FABIO LÓPEZ BLANCO** sostiene que «(...) es posible que este proceso lo inicie un poseedor material cuya tenencia del bien con ánimo de señor y dueño sea superior a un año, como lo manifestó la Corte en fallo de 26 de julio de 1945, (...) posibilidad que si bien es cierto no contempla de manera específica el art. 376, nada impide que pueda ejercitar un poseedor de más de un año para tener el adecuado disfrute del inmueble respectivo. En verdad, resultaría contrario a los fines de la protección de la posesión, partir del supuesto de que la omisión del art. 376 del CGP acerca de quienes están legitimados para iniciar el proceso de servidumbres, por no contemplar expresamente a los poseedores los excluye, ya que la regulación de las



Juzgado Promiscuo Municipal
Galán, Santander

mismas está dada para permitir el adecuado goce de los bienes, derecho al que no se sustrae el poseedor.»³.

En este litigio, revisados los folios de matrícula inmobiliaria **302-5264** y **302-4606** de la **OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS** de **BARICHARA, SANTANDER** obrantes a folios 16 a 19 y 24 a 27 del archivo 001 del cuaderno 1 del expediente virtual, en simetría con el informe rendido por el **REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS** de la aludida localidad obrante al archivo 019 del cuaderno 1 del expediente virtual, se colige que en los predios «**EL RINCÓN**» y «**MIREYA**» no existe titular de derecho real de dominio.

En esa dirección, se avista sobre los predios «**EL RINCÓN**» y «**MIREYA**» una cadena de negociaciones que involucran la llamada falsa tradición, pues lo que se ha transferido son derechos sucesorales; asimismo, el **REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS** de **BARICHARA, SANTANDER** certificó que los mencionados terrenos son «[p]redios en falsa tradición».

La Corte Constitucional en el veredicto T-549 de 2016 hablando de los bienes sin antecedentes registrales, expresó:

*«Es por ello que el legislador, de forma adecuada, previó cualquiera de estas situaciones en el Código General del Proceso, brindándole al juez que conoce del proceso de pertenencia las herramientas interpretativas para resolver el aparente conflicto normativo, así como las herramientas probatorias para llevar a una buena valoración de la situación fáctica. **Reconociendo, sin lugar a dudas, que en todos los casos en los que no exista propietario registrado en la matrícula de un bien inmueble, debe presumirse que este es un bien baldío.**» (Negritillas propias).*

Colofón, es dable afirmar que los predios «**EL RINCÓN**» y «**MIREYA**» son baldíos, por ende, no puede tenerse a **HENDER RODOLFO DURÁN SALAZAR** como su propietario ni poseedor, porque sobre esa especie de bienes no se predica la posesión, se reconoce la ocupación, y, su adjudicación, incumbe al Estado.

Al punto, la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Santander, en decisión del quince (15) de marzo de dos mil veintiuno (2021), radicado 2014-000187-02, con

³ **CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO**, Parte Especial, DUPRÉ Editores, 2017, página 134.



Juzgado Promiscuo Municipal
Galán, Santander

ponencia del Magistrado **CARLOS GIOVANNY ULLOA ULLOA**;
adujo:

«En el caso en concreto, del folio de matrícula inmobiliaria No. 303-2272 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barrancabermeja, visible a folio 16 y s.s. del cuaderno principal, se desprende que la Finca Rural conocida con el nombre de Venecia, no tiene dueño o propietario inscrito, es decir, carece de titular de derecho real alguno, pues desde la primera anotación, efectuada el 30 de enero de 1958, se registró una venta de mejoras en falsa tradición, de PRADA MELENDEZ PEDRO PABLO a GÓMEZ ESCOBAR LUIS FRANCISCO, siguiendo las demás tradiciones en forma irregular hasta llegar al aquí demandante en la anotación No. 4, COMPRAVENTA DE MEJORAS EN SUELO AJENO de LUIS GUILLERMO TORRES MALAGÓN a FRANCISCO BARBOSA, mediante escritura pública 846 del 23 de mayo de 2007 en la Notaria Única de La Dorada Caldas, acto registrado el 7 de junio de 2007.

Así las cosas, para el Tribunal resulta diáfano que el aquí demandante no puede considerarse dueño ni poseedor, en la medida que el bien es de aquellos considerados baldíos, pues por más que el predio sea explotado económicamente, como en efecto lo es, la interpretación efectuada por el órgano de cierre en lo constitucional, nos permite deducir que tratándose de bienes baldíos no se puede generar la figura de la posesión sino de la mera ocupación, hasta tanto no sea adjudicado por el Estado a través del procedimiento legalmente establecido.».

En ese orden, **HENDER RODOLFO DURÁN SALAZAR** no está legitimado para promover la negación de servidumbre sobre los predios «**EL RINCÓN**» y «**MIREYA**»; no sucede lo mismo con las fincas «**LA VEGA**» y «**SAN BASILIO**» puesto que allí el inicialista ostenta la propiedad en común y proindiviso con **ROSALBA SALAZAR de DURÁN**, eso revelan los folios de matrícula inmobiliaria **302-7738** y **302-5268** de la **OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS** de **BARICHARA, SANTANDER** obrantes a folios 12 a 15 y 20 a 23 del archivo 001 del cuaderno 1 del expediente virtual, de ahí es posible concluir que **HENDER RODOLFO DURÁN SALAZAR** está facultado para enarbolar la acción en estudio, se itera, únicamente con relación a los predios «**LA VEGA**» y «**SAN BASILIO**».

Continuando con el análisis de los demás presupuestos procesales, como el juicio se entabla en contra de las personas señaladas de hacer uso de una servidumbre inexistente, se deduce que **JESÚS MARÍA BERNAL HERRERA** y **MARTHA CECILIA GARCÍA CABALLERO** están legitimados en la causa por pasiva para concurrir al diligenciamiento.



Juzgado Promiscuo Municipal
Galán, Santander

Por situarse los bienes sobre los que recae la negación de servidumbre en comprensión territorial de **GALÁN, SANTANDER** y tratarse de una reyerta de mínima cuantía; observando las disposiciones del numeral 7.º del canon 26 del Estatuto Instrumental, concordante tanto con el numeral 7.º del 28, como con el numeral 1.º del 17 *ibídem*; esta célula judicial es competente en única instancia para dirimir el pleito.

Tampoco se avizora causal de irregularidad que invalide la actuación adelantada.

Previene la pauta 879 del Código Civil que la «[s]ervidumbre predial o simple servidumbre, es un gravamen impuesto sobre un predio, en utilidad de otro predio de distinto dueño»; lo que traduce en una limitación al derecho de dominio, en tanto se concibe como una carga asignada a un inmueble en beneficio del propietario de otro bien raíz.

El 905 del Código Civil regula la servidumbre de tránsito, advierte que «[s]i un predio se halla destituido de comunicación con el camino público, por la interposición de otros predios, el dueño del primero tendrá derecho para imponer a los otros la servidumbre de tránsito en cuanto fuere indispensable para el uso y beneficio de su predio, pagando el valor del terreno necesario para la servidumbre, y resarciendo todo otro perjuicio».

7. CASO CONCRETO

En el asunto de marras hay que determinar si efectivamente sobre los predios «**LA VEGA**» y «**SAN BASILIO**» no existe una servidumbre de tránsito en favor del predio «**EL NARANJITO**».

Examinados los folios de matrícula inmobiliaria número **302-7738** y **302-5268**, es evidente que los predios «**LA VEGA**» y «**SAN BASILIO**» no se encuentran afectados con servidumbres de tránsito; recuérdese que esta clase de servidumbres solo pueden constituirse a través de un título, esto es, por escritura pública, cuando los dueños del inmueble sirviente y dominante de consuno la instituyen; o por mandato jurisdiccional, en el evento de surgir desacuerdo en la imposición del gravamen.

Con todo, habida cuenta que por indicación del postulado 879 del Código Civil y 665 *ídem* las servidumbres son una limitación al dominio y un derecho real, para su perfeccionamiento es forzosa su inscripción en el certificado de libertad y tradición de la finca sirviente; ello, por requerirlo expresamente el literal *a* del precepto 4.º de la Ley 1579 de 2012 que a la letra dice:



Juzgado Promiscuo Municipal
Galán, Santander

«ARTÍCULO 4o. ACTOS, TÍTULOS Y DOCUMENTOS SUJETOS AL REGISTRO. Están sujetos a registro:

a) *Todo acto, contrato, decisión contenido en escritura pública, providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre bienes inmuebles».*

Así entonces, al no estar registrada en los folios de matrícula inmobiliaria número **302-7738** y **302-5268** no existe servidumbre de ninguna naturaleza, además, no es factible que **JESÚS MARÍA BERNAL HERRERA** y **MARTHA CECILIA GARCÍA CABALLERO** incursionen en los predios «**LA VEGA**» y «**SAN BASILIO**», visto que no media el permiso de sus propietarios ni orden judicial que los autorice, es decir, la conducta de los convocados ciertamente se muestra arbitraria.

De otra parte, el uso indebido del camino que se extiende sobre los predios «**LA VEGA**» y «**SAN BASILIO**» fue confesado por **JESÚS MARÍA BERNAL HERRERA** y **MARTHA CECILIA GARCÍA CABALLERO**; véase que al replicar el hecho cuarto del libelo, con la ayuda de su apoderado, alegaron que «(...) [s]i bien es cierto mis mandantes usan la vía debido a que hubo autorización del señor **HENDER RODOLFO DURÁN SALAZAR**. Pero debido a que se liquidó la sociedad con el señor **HENDER RODOLFO DURÁN SALAZAR** y después también se liquidó la sociedad con los señores **MARÍA EDELMIRA PORRAS SANTAMARÍA** y **EXPEDITO GÓMEZ DURÁN**, ahí comenzaron los inconvenientes por el paso por la vía.».

De lo antelado se infiere que en un momento **HENDER RODOLFO DURÁN SALAZAR** permitió a **JESÚS MARÍA BERNAL HERRERA** y **MARTHA CECILIA GARCÍA CABALLERO** usar la carretera que pasa por los predios «**LA VEGA**» y «**SAN BASILIO**», no obstante, por discrepancias entre los nombrados esa aquiescencia finalizó, lo que implica, inexorablemente, que a los accionados les está vedado transitar por las propiedades del reclamante, y si desconocen esa prohibición, su comportamiento tipificaría una perturbación sancionable por el ordenamiento legal patrio.

Echando mano del numeral 5.º de la estipulación 365 de la Ley 1564 de 2012, ante la prosperidad parcial de las súplicas de **HENDER RODOLFO DURÁN SALAZAR**, esta judicatura se abstendrá de condenar en costas.

Para culminar, atendiendo el contenido del memorial obrante al archivo 043 del cuaderno 1 del expediente virtual, se tendrá por revocado el encargo otorgado por **JESÚS MARÍA BERNAL**



Juzgado Promiscuo Municipal
Galán, Santander

HERRERA y **MARTHA CECILIA GARCÍA CABALLERO** al letrado **ERIKH OTONIEL LOZA CALA**; igualmente, se le reconocerá personería adjetiva al jurista **JUAN DIEGO CRUZ LIZCANO** para que ejerza la representación de los mentados ciudadanos.

8. D E C I S I Ó N

En razón y mérito de lo expuesto, el **JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL** de **GALÁN, SANTANDER**, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley;

9. R E S U E L V E:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda *Verbal Sumaria de Negación de Servidumbre* incoada por **HENDER RODOLFO DURÁN SALAZAR**, por medio de vocera judicial, en contra de **JESÚS MARÍA BERNAL HERRERA** y **MARTHA CECILIA GARCÍA CABALLERO**; respecto de los predios «**EL RINCÓN**» y «**MIREYA**» identificados con los folios de matrícula inmobiliaria número **302-5264** y **302-4606** de la **OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS** de **BARICHARA, SANTANDER**; por lo motivado.

SEGUNDO: CONCEDER las pretensiones de la demanda *Verbal Sumaria de Negación de Servidumbre* incoada por **HENDER RODOLFO DURÁN SALAZAR**, por medio de vocera judicial, en contra de **JESÚS MARÍA BERNAL HERRERA** y **MARTHA CECILIA GARCÍA CABALLERO**; respecto de los predios «**LA VEGA**» y «**SAN BASILIO**» identificados con los folios de matrícula inmobiliaria número **302-7738** y **302-5268** de la **OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS** de **BARICHARA, SANTANDER**; conforme la motivación.

TERCERO: DECLARAR que en los predios «**LA VEGA**» y «**SAN BASILIO**» identificados con los folios de matrícula inmobiliaria número **302-7738** y **302-5268** de la **OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS** de **BARICHARA, SANTANDER**, no existe servidumbre activa de tránsito en favor del predio «**EL NARANJITO**» identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número **302-2694** de la **OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS** de **BARICHARA, SANTANDER**.

CUARTO: ORDENAR a **JESÚS MARÍA BERNAL HERRERA** y **MARTHA CECILIA GARCÍA CABALLERO** que se abstengan de perturbar a **HENDER RODOLFO DURÁN SALAZAR** en el uso y goce



Juzgado Promiscuo Municipal
Galán, Santander

de los predios «**LA VEGA**» y «**SAN BASILIO**» identificados con los folios de matrícula inmobiliaria número **302-7738** y **302-5268** de la **OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS** de **BARICHARA, SANTANDER**; so pena que la autoridad correspondiente imponga las sanciones del caso.

QUINTO: ORDENAR el levantamiento de la inscripción de la demanda en los folios de matrícula inmobiliaria número **302-7738, 302-5264, 302-5268** y **302-4606** de la **OFICINA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS** de **BARICHARA, SANTANDER**, comunicada con oficio 149 AC librado el dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023).

Por secretaría procédase de conformidad.

SEXTO: ABSTENERSE de condenar en costas, por lo decantado líneas atrás.

SÉPTIMO: TENER por revocado el poder conferido al abogado **ERIKH OTONIEL LOZA CALA**, a quien se le reconoció personería el ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023).

OCTAVO: RECONOCER personería al profesional del derecho **JUAN DIEGO CRUZ LIZCANO** identificado con la cédula de ciudadanía número 91.280.727 expedida en Bucaramanga, Santander, portador de la tarjeta profesional 74.164 del Consejo Superior de la Judicatura, para representar a **JESÚS MARÍA BERNAL HERRERA** y **MARTHA CECILIA GARCÍA CABALLERO**, en los términos y con las facultades que le fueron conferidas.

NOVENO: NOTIFICAR la presente sentencia por estado, por expresa indicación del artículo 295 del Código General del Proceso.

DÉCIMO: ADVERTIR que contra esta sentencia no procede el recurso de apelación, por tratarse de un asunto mínima cuantía, el cual, según el artículo 17 del Código General del Proceso, es de única instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado Por:

Luis Carlos Ariza Camacho
Juez
Juzgado Municipal
Juzgado 01 Promiscuo Municipal
Galan - Santander

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **1419e056d6d87ce3b5ef3cf014888138a74d8bec942baf7363f99011581f204a**

Documento generado en 24/10/2023 09:46:15 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>